

<https://doi.org/10.15446/mag.v38n1.113074>

## LA EXPRESIÓN DEL PODER CIVIL EN EL PARO NACIONAL DE 2021: ETNOGRAFÍAS DEL ESTALLIDO SOCIAL DE COLOMBIA

---

JESSICA VALENZUELA\*

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ciudad de México, México



\*[jessica.valenzuela@estudiante-flacso.mx](mailto:jessica.valenzuela@estudiante-flacso.mx) ORCID: [0000-0002-4219-7783](https://orcid.org/0000-0002-4219-7783)

Artículo de investigación recibido: 10 de julio de 2023. Aprobado: 22 de diciembre de 2023.

**Cómo citar este artículo:**

Valenzuela, Jessica. 2024. "La expresión del poder civil en el Paro Nacional de 2021: Etnografías del Estallido Social de Colombia". *Maguaré* 38, 1: 17-54. DOI: <https://doi.org/10.15446/mag.v38n1.113074>

## RESUMEN

Este texto es el resultado de etnografías, en plural, del paro nacional de 2021, también llamado “estallido social de Colombia”. Durante la investigación, recuperé dos formas del mismo método: la etnografía clásica de los repertorios de acción y la netnografía, como método de registro de las plataformas virtuales. Esta inmersión en campo nos dice que en esta movilización una parte de la sociedad logró un consenso sobre la inviabilidad de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. A este consenso lo acompañó la demanda y defensa de una pluralidad de intereses colectivos de diferentes comunidades, organizaciones e iniciativas autónomas. Por ello, sostengo que el paro nacional develó la capacidad de los actores sociales para participar en las definiciones de los bienes públicos y derechos, que llamaré *poder civil*.

*Palabras clave:* estallido social de Colombia, etnografía, netnografía, paro nacional, poder civil.

## **THE EXPRESSION OF CIVIL POWER IN THE NATIONAL STRIKE OF 2021: ETHNOGRAPHIES OF THE SOCIAL UPRISING IN COLOMBIA**

### **ABSTRACT**

This article draws upon ethnographic research conducted during the 2021 national strike, also known as the Colombian Social Uprising. The research methodology encompassed both classical ethnography, focusing on action repertoires, and netnography of virtual platforms. Through fieldwork, it became evident that significant segments of Colombian society reached a consensus regarding the inconvenience of the tax reform proposed by the government of Ivan Duque. This consensus was accompanied by the articulation and defense of diverse collective interests across various communities, organizations, and autonomous initiatives. Consequently, I argue that the national strike demonstrated the capacity of social actors to engage in what I term civil power: the ability to shape public goods and rights.

*Keywords:* Colombian social uprising, civil power, ethnography, netnography, national strike.

## **A EXPRESSÃO DO PODER CIVIL NA GREVE NACIONAL DE 2021: ETNOGRAFIAS DA EXPLOSÃO SOCIAL NA COLÔMBIA**

### **RESUMO**

Este texto é o resultado de etnografias, no plural, da greve nacional de 2021, também chamada de “explosão social na Colômbia”. Durante a pesquisa, recuperei duas formas do mesmo método: a etnografia clássica dos repertórios de ação e a netnografia, como método de registro das plataformas virtuais. Essa imersão no campo nos mostra que, nessa mobilização, uma parte da sociedade alcançou um consenso sobre a inviabilidade da reforma tributária proposta pelo governo de Iván Duque. Esse consenso foi acompanhado pela exigência e defesa de uma pluralidade de interesses coletivos de diferentes comunidades, organizações e iniciativas autônomas. Por isso, argumento que a greve nacional revelou a capacidade dos atores sociais de participar nas definições dos bens públicos e direitos, que chamarei poder civil.

*Palavras-chave:* etnografia, explosão social na Colômbia, greve nacional, netnografia, poder civil.

## INTRODUCCIÓN

**E**l paro nacional de 2021 en Colombia se sumó a la serie de movilizaciones masivas que estallaron en Latinoamérica desde 2019, también conocidas como *estallidos sociales* (Murillo 2021). El paro inició en contra de la reforma tributaria impulsada por el gabinete del entonces presidente Iván Duque. Uno de los puntos más problemáticos del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible fue la modificación de la lista de bienes que no estaban gravados por el impuesto sobre el valor añadido (IVA) (Carrasquilla 2021). La reforma provocó un descontento generalizado e

... hizo que el paro promovido por sindicatos y grupos estudiantiles se convirtiera en una protesta extendida a ciudades grandes, intermedias y pequeñas, que sobrepasó, por mucho, las bases sociales de sus organizaciones, pues recogía las múltiples expresiones y motivos de descontento social. (González 2022, 97)

Durante la movilización, una parte de la sociedad logró un consenso sobre la inviabilidad de la reforma tributaria propuesta por el gobierno. Este paro asombra, en un país con baja tendencia a la movilización en comparación con otros países de la región (Acled 2023). Por ello, en medio de un de conflicto social que en gran medida es armado (Ríos 2021), cabe preguntar cómo estudiar este acontecimiento en el país.

Este texto presenta los resultados parciales de mi investigación de doctorado sobre el impacto del paro en la sociedad y en la vida democrática de Colombia. La investigación sigue un método secuencial exploratorio, que suele organizarse en tres fases (Creswell 2015). Primero, una fase cualitativa, que comprende inmersión en campo a través de etnografía, entrevistas y revisión hemerográfica. Segundo, un componente cuantitativo, mediante el cual se organizan los datos en una base instrumental o, como dice Hutter, pone en números las palabras (2014). Este instrumento debe probarse y validarse con la información que existe hasta el momento para que pueda ser reproducida y usada por la comunidad. El último paso, uno de los más interesantes, se enfoca en comprobar la validez del instrumento. Esta investigación presenta una parte de la primera fase, que recupera el trabajo de campo realizado en las calles, asambleas y procesos organizativos, pero también en las plataformas virtuales, que fueron herramientas clave para la movilización.

El artículo se divide en tres partes: primero describo la estrategia metodológica desarrollada para el trabajo de campo; después discuto las categorías analíticas para aproximarme a la heterogeneidad de la base social del paro, como característica diferenciadora de otros procesos de movilización, y tercero, a modo de interpretación de los datos, sugiero que la pluralidad que se le atañe al estallido social no se puede pensar sin la participación de la sociedad civil en Colombia, que ha tenido un rol principal en la resolución de conflicto social y armado de forma no violencia (Uribe 2004). Este entramado social presupone un mínimo consenso en el que “se acepta el derecho de otros actores sociales a competir por influencia política en la definición de ese bien público sin amenaza de violencia” (Oxhorn 2017, 75). Sostengo que el paro nacional devela esta capacidad de los actores sociales para participar en las definiciones de los bienes públicos y derechos del país, que llamaré *poder civil*.

#### METODOLOGÍA

Para acercarme a la heterogeneidad que subyace al paro, realicé una inmersión etnográfica en dos niveles. Por un lado, hice trabajo de campo en los repertorios de la movilización, es decir, considerando “las maneras establecidas en las que pares de actores hacen y reciben demandas orientadas hacia los intereses del otro” (Tilly 2005, 45). Me acerqué a los bloqueos, las movilizaciones masivas, los plantones, las tomas artísticas entre el 28 de abril y 30 de junio de 2021 y participé en los repertorios de consenso, más que de contienda, como mesas de diálogo y asambleas durante julio y agosto del mismo año. Hice trabajo de campo en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Tolima, en donde realicé algunas entrevistas que presentaré en anonimato. En estos espacios tuve conversaciones y entrevistas semiestructuradas con manifestantes en torno a los *motivos, medios y orientaciones* de la movilización, los tres ejes principales de la acción colectiva, para Melucci (1996).

En un segundo nivel, realicé una *netnografía* (Kozinets y Gambetti 2021) de la *acción conectiva* (Bennett y Segerberg 2012), es decir, un trabajo de campo virtual de las dinámicas de la movilización en plataformas digitales, como Facebook, Twitter e Instagram. Bennet y Segerberg señalan que la acción conectiva es resultado de las dinámicas de movilización en las plataformas de comunicación virtual con mayor conectividad, como las redes sociales. Desde Túnez, los movimientos globales y transnacionales

y las grandes olas de movilización han aprovechado la flexibilidad de la acción conectiva para lograr su amplitud y expansión (Mattoni 2017).

Para la netnografía, diseñé un protocolo de seguimiento a: 1) prensa independiente en Twitter y Facebook, 2) canales de difusión de organizaciones sociales que participaron en el movimiento, 3) cuentas privadas también involucradas con la movilización, tanto simpatizantes como opositores, y 4) un chat masivo de Telegram llamado “Colombia Informa”, que se mantuvo activo durante los 64 días de movilización. También hice seguimiento a los periódicos nacionales, como El Tiempo y El Espectador, a la vieja usanza de los análisis de eventos de protesta (*protest event analysis*) (Hutter 2014). Mantuve jornadas de seguimiento entre las nueve de la mañana y una de la madrugada, debido a que diferentes episodios de violencia ocurrieron y se extendieron a medianoche. El seguimiento lo realicé en jornada continua, después del café y hasta la última noticia del día, para registrar con fidelidad la sucesión de los eventos en las ciudades principales, como Cali, Popayán, Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Cúcuta, Barranquilla y Santa Marta, pero también en municipios rurales de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Putumayo, Huila y Boyacá.

### El paro

Colombia tiene tradición en *paros*. En lo que llevamos del siglo XXI, la sociedad colombiana ha visto un transcurrir de paro cívicos, estudiantiles, laborales, agrarios y de diversos sectores sociales (Cruz 2016). Sin embargo, el último paro nacional desbordó lo que se entendía por *parar para avanzar*, pues pasó de reivindicaciones comunes a una participación variopinta de la sociedad. Para Cruz-Rodríguez (2022), la movilización fue “transversal” al país, permitió una masiva capacidad organizativa y dio mayor autonomía en su convocatoria y en la definición de las demandas. Según González, se vieron

... camioneros independientes enfrentados a sus dirigentes gremiales, campesinos opuestos al bloqueo de las vías, pobladores reacios a los peajes excesivos para el ingreso a sus ciudades, habitantes descontentos de barrios marginales, jóvenes sin trabajo ni acceso a la educación y otros grupos minoritarios. (2022, 97)

A partir de la etnografía, encontré una serie de categorías analíticas que dan cuenta de dicha heterogeneidad. Estas categorías demuestran cómo las luchas sociales históricas del país, comunidades, organizaciones formales y no formales participaban en el paro de acuerdo con sus intereses e identidades colectivas, no solo en rechazo de la reforma, sino también para modelar y definir los bienes públicos, como las calles, la educación, la memoria, ¡incluso el fútbol! Así mismo, promovieron los derechos de la ciudadanía, como la libre asociación y la protesta.

### *La convocatoria*

La convocatoria fue ambiciosa. Del primer día, logré archivar 59 afiches de invitación a los ejercicios de protesta, varios de Bogotá, otros de Cali, pero también de municipios del extremo sur del país, como Valle del Guamuez, en Putumayo, hasta el extremo norte, como el Departamento de La Guajira. Cada uno de estos afiches se dirigía a diferentes sectores sociales y latitudes del país y dejó huella del recorrido de la protesta en las entidades territoriales (Figura 1).

El primer día del paro, el 28 de abril, contó con amplia participación en diferentes municipios del país. En Antioquia fueron notorios municipios como Medellín, Anorí, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Hispania y Andes; en este último, comunidades campesinas e indígenas bloquearon las vías principales del municipio exigiendo atención del gobierno (Diario de campo 1). En Segovia, campesinos y campesinas, integrantes de diversas organizaciones sociales, entre ellas el Comité de Integración Agro Minero del Nordeste Antioqueño, se movilizaron en el casco municipal. En sintonía con la convocatoria nacional, las mesas mineras del Pacífico, el bajo Cauca, Antioquia, Caldas, Córdoba y el sur de Bolívar anunciaron la convocatoria para adelantar un paro nacional minero si el gobierno no escuchaba sus preocupaciones por el proyecto de Ley 059 de 2020, que afectaría a varias de las mineras que carecían de títulos. Notisegovia publicó con la noticia sus pancartas, que decían “Nos preocupa los lugares en donde hacemos vida” (Diario de campo 1).

**Figura 1.** Afiche de invitación en Valle del Guamuez, Putumayo



**Fuente:** Imagen de circulación masiva en redes sociales (2021)

Catatumbo fue otra región que participó constantemente durante el paro nacional. En el municipio de Tibú, Norte de Santander, “campesinos y campesinas, indígenas, jóvenes, grupos de camioneros, volqueteros y motociclistas se movilizaron para denunciar la crisis humanitaria que viven en la región y en el país”, según publicó Colombia Informa vía Twitter (Diario de campo 1). Hubo movilizaciones en los corredores viales cardinales que conectan Tibú, Sardinata y El Zulia. Según RTVC en Twitter, los principales reclamos de las comunidades campesinas se centraban en la reforma tributaria, la erradicación de cultivos de uso ilícito con glifosato y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2016 (Diario de campo 1). Hacia el sur, en Puerto Wilches, Santander, las organizaciones se opusieron, específicamente, a los proyectos piloto de fracturación hidráulica (*fracking*) y a las consiguientes afectaciones al medio ambiente del país, como lo reportó Prensa Rural (Diario de campo 1).

También fue notoria la manifestación que se movilizó entre Sogamoso y Belencito, en el Departamento de Boyacá, con el objetivo de bloquear a la multinacional Votorantim. En 2015, la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, Boyacá, en pro de la conservación de los páramos de Pisba y de Colombia, se opuso a la apertura de la mina El Banco por parte de Vototarim. En abril de 2021, Prensa Rural reportó cómo el Sindicato de Acerías Paz del Río (Sintrapazdelrio) participó en el paro con un pliego petitorio ante la misma multinacional que reclamaba la protección de los derechos laborales (Diario de campo 1).

En Cauca, organizaciones sociales, especialmente indígenas, campesinas y de comunidades negras y afrodescendientes, recorrieron la carretera Panamericana en caravana, como lo habían realizado desde hacía tres años, insistiendo en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el derecho a la vida, a la tierra, el territorio, justicia y autonomía. Noticias Tierradentro transmitió así vía Facebook: “Estamos en contra de todas las afectaciones que generan desarmonía al pueblo colombiano, vamos todos a las calles, debemos bajar la Reforma Tributaria, la gente tiene hambre” (Diario de campo 1). La entrevista de Noticias Tierradentro desde Belalcázar, Cauca, resalta el *hambre* como principal referente de motivación para el encuentro. Precisamente, después de 2020, “aproximadamente 3.551.522 de personas ingresaron a la condición de pobreza monetaria, y 2.781.383 personas pasaron a estar en condición de pobreza monetaria extrema en el 2020” (Barbosa y Sánchez 2021, 111)

La representación de las luchas regionales hace parte de un repertorio histórico de lucha social. Para Saade y Benavides, “la potencia de lo regional no fue algo inédito” en el paro (2022). En su estudio muestran la relevancia de las luchas sociales del Catatumbo, el piedemonte del Pacífico y bajo Cauca, que han demandado atención directa estatal desde 1990. Estas regiones han sufrido directamente 50 años de conflicto armado, así como una desconexión notoria del centro capitalino y administrativo con las demandas de salud, educación, autonomía, tierra, territorio, paz, justicia y reparación de los territorios (Comisión de la Verdad 2022).

Pese a que el registro indica una participación variopinta en diferentes municipios del país y con dinámicas semejantes en las formas de protesta, Cali fue una ciudad protagonista en la formación de la movilización. De hecho, la primera noticia que registré sobre el paro fue el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar, ubicada al norte de Cali, a las 6:15

de la mañana del 28 de abril de 2021, en una cuenta privada de Twitter: “El pueblo indígena Misak tumba la estatua de Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Cali. ‘Se caen los símbolos del genocidio’ – dice AISO” (Diario de campo 1). Las imágenes se difundieron durante el albor de la mañana en las redes sociales. Los representantes de la organización de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO) ondeaban la bandera del pueblo misak sobre una estatua tumbada al suelo, que antes señalaba con su dedo índice la urbe del suroccidente.

El registro de la movilización en Cali indica un constante crecimiento de la protesta. A las 10 de la mañana del 28 de abril, la página oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali publicó un hilo con los puntos de bloqueo en la ciudad. La mayoría de estos, como Sameco, Yumbo, Torre de Cali, todo el oriente, desde Puerto Rellena hasta Juanchito, Calipso, Andrés Sanín, permanecieron allí por dos meses más. Es importante preguntar por el *repertorio de estrategias* de las organizaciones o grupos sociales para establecer bloqueos con una notable capacidad organizativa de la acción colectiva. Como lo aclara Rossi (2022), esta indica el conjunto de procesos colectivos históricos y enraizados para la elaboración y creación de estrategias de movilización. No supone una acción espontánea, sino prácticas conocidas y compartidas.

**Tweet 1. Secretaría de Movilidad de Cali–@MovilidadCali–28 de abril**

*Bloqueos en el norte/ Sameco/ Yumbo/ Carrera 1.ª con calle 70/ Terminal canceló todos los despachos. / Concentración de motocicletas en torre de Cali. / Esmad CAM// Oriente/ Carrera 8.ª con 70/ Carrera 7.ª con calle 70/ Entrada Andrés Sanín/ Puerto Rellena/ Bloqueos sector de La Casona/ Bloqueos entrada Vallegrande/ Comfandi El Prado: cierre total, quema de llantas. /Calipso/ En la carrera 1.ª con 78 se presentan cierres. / Juanchito/ Cuatro esquinas// Sur/ Calle 5.ª con 94, bloqueo/ Bloqueos en el sector de El Castillo/ Vía Puerto Tejada/ Calle 16 con 100/ Calle 13 con 100/ Sector Siloé, 1.ª con 44/ Cosmocentro/ Ciudad 2000// Oeste/ Reporte bloqueo total/ Portada/ Santa Rita/ Corregimientos de Montebello y Golondrinas*

En la protesta no solo se dieron los bloqueos en Cali, sino también nuevas designaciones del espacio, de los barrios, de los portales de transporte, como plazas de la resistencia, parques de la resistencia,

portales de la resistencia. En el primer día de movilización registré, de una cuenta privada de Twitter, el mensaje “Loma de la Cruz, gran movilización de trabajadoras y trabajadores contra la reforma tributaria, el incremento de la violencia y la falta de garantías laborales” (Diario de campo 1). Ya para el 30 de abril, los y las manifestantes cambiaban la cruz en razón de la dignidad, y en la misma red social el reporte era: “Loma de la dignidad, viernes 30 de abril, totalmente lleno, dignidad, fiesta, sin enfrentamiento” (Diario de campo 1).

Violencia policial, así como hechos de quema, robo e incendios de manera paralela a la protesta sucedieron. El 30 de abril, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (2021) reportó ocho personas muertas y seis más sin confirmar en la ciudad, una mujer abusada sexualmente por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), 84 civiles detenidas, tres personas desaparecidas y 28 heridas, muchas de ellas de gravedad y con impacto de armas de fuego. Para el 1 de mayo, la organización Temblores registró 21 casos de violencia homicida a manos de la policía (2021). Al mismo tiempo que se organizaban velatones en las noches para dignificar la memoria de las personas violentadas durante el paro, en el día se gestionaban los alimentos de las ollas comunitarias, así como cánticos de cantoras del Pacífico para acompañar la memoria de las familias afectadas. Durante las marchas ocurridas entre el 1 y 2 de mayo, días en que la represión fue crítica, también registré varios de los eventos festivos que cruzaron las calles con canciones de salsa y estaciones de música en diferentes alturas de las vías de la ciudad. El 1 de mayo, en un punto de encuentro organizado en la rebautizada Loma de la Dignidad, se presentó una banda de punk debajo del puente vehicular, al lado de una plataforma de salsa y otra de baile (Diario de campo 1). La coexistencia entre la vida y la muerte, la representación de la democracia y su represión.

Durante esos primeros cuatro días de movilización, las administraciones locales impusieron taxativos toques de queda en muchas ciudades. El 1 de mayo, Iván Duque decretó la asistencia militar a todas las ciudades del país, con especial énfasis en Cali. El mismo día, el ministro de defensa Diego Molano solicitó a la ciudadanía denunciar el *vandalismo*. En su cuenta de Twitter, @Diego\_Molano, escribió: “600 ciudadanos han denunciado actos vandálicos en Cali, gracias por denunciar” (Diario de campo 1).

### *Los bloqueos*

Después del 2 de mayo, fue recurrente la configuración o fortalecimiento de bloqueos de vías, calles, parques, barrios, puentes y diferentes espacios públicos. En Cali, según el Instituto de Estudios Interculturales (2021) de la Pontificia Universidad Javeriana, se tenía conocimiento de 35 puntos de bloqueo o puntos de resistencia después de la movilización por el día del trabajo. Mientras tanto, en Norte de Santander fue constante la organización localizada de “puntos de resistencia”, por lo menos tres zonas ubicadas en la conexión entre Ocaña, Tibú y Sardinata. Así lo reportó Colombia Informa, @col\_informa, vía Twitter, el 5 de mayo: “En el municipio de Mutiscua, Norte de Santander, bloquean la vía principal, expresándose contra el mal gobierno y la falta de respuesta al campesinado” (Diario de campo 1).

También el suroccidente del país cuenta con un largo recorrido en la instalación de la lucha social con el bloqueo de carreteras, un repertorio antiguo y conocido para la región (Cruz 2017). Según lo manifestó el 4 de mayo un integrante de la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), todas las organizaciones inscritas en el comité se sumaron al acompañamiento de los 15 puntos de bloqueo instalados sobre la extensión de la vía Panamericana (Diario de campo 1). En esta región también agregó el bloqueo de Ipiales, con una duración de 15 días sobre carretera; al sur de Huila, 10 días, y en Buenaventura, casi un mes.

En los puntos de resistencia de Cali, sus integrantes contaban con una delimitación clara del lugar y de la acción desde los primeros días del paro. Según las notificaciones de la Secretaría de Movilidad de Cali por Twitter, vía @MovilidadCali el 8 de junio, la mayoría de los bloqueos iniciaban a las 10 de la mañana, por lo general precedidos del agrupamiento de materiales, como llantas o indumentaria vial (Diario de campo 1). A las doce del día iniciaba la olla comunitaria que alimentaba a sus habitantes, mientras que en la noche ocurrían los hostigamientos de la fuerza pública en los puntos de resistencia. Como relató ‘Andrés’, a quien entrevisté en un punto de resistencia de Cali el 25 de mayo: “Todos los de aquí, los del barrio, todos hemos comido muy bien aquí (sic) en la olla desde que inició el Paro. Hemos comido mejor que en la casa, con decirle. Hay mucha hambre en la ciudad” (Diario de campo 1). A inicios de la movilización recuperé un cartel de invitación dirigido a los barrios del sur de Bogotá, cuyo texto resalta

el *hambre* en primer plano y respalda la observación anterior (Figura 2). Precisamente, la pandemia por el covid-19 agravó los indicadores de pobreza y desigualdad, que ya eran materia de preocupación antes de 2019. En octubre de 2020, Fedesarrollo estimó la multiplicación de los niveles de pobreza en 1,83 veces, es decir, un aumento de 6 millones de personas (Núñez 2020).

Bogotá es un caso realmente interesante. Desde el paro de 2019, las marchas no culminaron en la plaza Bolívar, como había sido recurrente hasta ese momento. Recuerdo la sentida marcha de los simpatizantes del “Sí” por la paz en octubre de 2016, en aquella noche en que la movilización desbordó la plaza central de Bogotá en una búsqueda por respaldar los Acuerdos de Paz, a pesar de su fracaso en el plebiscito. Sin embargo, después del paro nacional del 21 de noviembre, también conocido como 21N, la plaza Bolívar fue cancelada como espacio de manifestación. Desde entonces, marchas y protestas se dirigían a otros puntos de la ciudad, como Los Héroes, Fontibón, la calle 170, Usme o los Sures de Bogotá (Bosa, Kennedy, El Tintal y, especialmente, el Portal Américas). En este portal de transportes, renombrado como Portal de la Resistencia, sus transeúntes, mujeres, hombres, jóvenes, desempleados, habitantes del sector, de sus casas y las calles, y toda la *muchachada* delimitaron un espacio de 50 x 50 metros para asignar un espacio para la paz. Desde el 5 de mayo, aquel recuadro fue denominado espacio humanitario *al calor de la olla*, “un espacio libre de violencias que representa la paz que buscamos lograr a través de las manifestaciones y los reclamos de los y las jóvenes que aquí nos manifestamos”, como lo reseñó *¡Pacifista!*, así como de todos los actores interesados en una transformación profunda sobre las relaciones sociales (Diario de campo 1).

**Figura 2.** Afiche de invitación al Paro Nacional en Bogotá



**Fuente:** Imagen de circulación masiva en redes sociales (2021).

En Medellín, para el 3 de mayo, los manifestantes se referían al Parque de la Resistencia, conocido anteriormente como el Parque de los Deseos. Allí organizaron varias tomas culturales en forma de cine-foros, actuaciones, performance y otras intervenciones artísticas que transformaron ese paisaje. En un comunicado de Colombia Informa, un manifestante explicaba que la ciudadanía había salido a marchar todos los días desde que había iniciado el paro, pero fue la indignación ante la brutalidad policial la que mantuvo la protesta (Diario de campo 1). Aunque dicho encuentro no se trataba de un bloqueo sobre vías o sectores, recibió el mismo tratamiento policial.

¿Cómo definir un bloqueo? Este tipo de práctica, en su semejanza con las barricadas francesas, es un repertorio con largo recorrido histórico. “La acumulación de objetos como acto o táctica de protesta política hace su debut en la historia durante el ‘Día de las Barricadas’ [*Journée des barricades*] del 12 de mayo de 1588” (Offerlé 2013, s.p.). El mismo

fenómeno se repitió en 1648 y 1675, pero solo en el siglo XIX las barricadas se convierten en el símbolo parisino de la revolución (Snow et al. 2013). Para Offerlé, las barricadas, a diferencia de los bloqueos de vías o compuertas, son una práctica que expresa la solidaridad *in situ*, de manera localizada (Offerlé 2013). Defienden un mensaje del movimiento desde un lugar, cuya acción requiere de recursos materiales, como piedras, llantas, calles estrechas, pero también recursos humanos, como las redes que sostienen dicho lugar.

Este fue uno de los repertorios que mayor conmoción causó a nivel nacional. Después de un mes de movilización, el Comité Nacional del Paro argumentó que los bloqueos “hacen parte de las posibilidades legítimas para las protestas”, mientras que el gobierno señaló que eran ilegítimas (El Espectador 2021). Incluso el gobierno reclamó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no condenar los bloqueos durante la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos en el país (El Tiempo 2021). De un lado, se trata de obstrucción, del otro, un espacio relevante para demandar atención gubernamental. Así lo manifestaba un usuario de Twitter el 8 de mayo: “Para el Gobierno esto es un bloqueo, para nosotros es un punto de resistencia. Ojalá hubiera de otra, pero si no es así, desde Bogotá ni arriman las narices por acá. Y así llevamos 50 años” (Diario de campo 1). He tomado esta cita de una cuenta privada que realizó algunas entrevistas en Ipiales, durante la movilización de 11 mil indígenas pastos y yanaconas, que da cuenta de la diferencia de significados entre los actores sociales.

### **El desacuerdo**

El domingo 2 de mayo, el gobierno anunció la redacción de un nuevo proyecto de ley, mas no el retiro de la reforma tributaria (El País 2021). La movilización continuó el 3 de mayo demandando la renuncia de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, quien efectivamente dimitió, aunque la movilización respondió con la consigna “El paro no para” y las barricadas continuaron. Después de hacerse pública la noticia, un manifestante en el barrio Meléndez de Cali expresó en redes sociales: “no vamos a parar, vamos por más muchachos, vamos a resistir, necesitamos más gente” (Diario de campo 1). Entre el 3 y 11 de mayo los principales bloqueos se fortalecieron en el país y así mismo se autodenominaron puntos de resistencia o espacios humanitarios.

Para Rancière, el desacuerdo se instala en la interlocución, en la interrupción de un tercero en un diálogo. Cuando un superior de una fábrica pregunta “¿me comprenden?” no cuestiona el significado de la enunciación, sino que realiza un sondeo de quienes participan de la misma razón o el mismo *logos* de una aparente comunidad homogénea. “Como el inferior comprendió la orden del superior, [y] aquél participa de la misma comunidad de los seres parlantes, es, en ello, su igual” (Rancière 1996, 68). Quien manifiesta su desacuerdo también manifiesta no pertenecer a la comunidad, que goza de igualdad solo en su *doxa* aparente. La política de Rancière, muy diferente de la perspectiva habermasiana, surge cuando los seres sin parte del logos cuestionan su parte en la palabra. La interlocución es una *distorsión* en la comunidad imaginada, es una fractura en la idea de igualdad, es la interrupción de los sin parte.

Dubinín, un ilustrador mexicano, diseñó e imprimió en *La Linterna* de Cali una ilustración titulada “Volveré y seré millones”, una conjunción de imágenes sobre el paro reunidas en un cuadro de un pliego (Figura 3). Sobre una línea gruesa de elementos tipográficos rojos, se levanta un gigante Belalcázar que divide el cuadro de un pliego en dos mitades. De un lado, los actores gubernamentales, fuerza pública, gobernadores, y las reformas marcadas como un sello sobre la suela de un zapato; del otro, los actores de la movilización, la minga indígena, el cartel “Disponibile Puerto Resistencia”, Canal 2, los colectivos de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y *queer* (Lgbtiq), las primeras líneas y marchantes. Dubinín logra un efecto intrínseco a su mensaje: una imagen sobre la distorsión de la comunidad. El afiche se asemeja a una montaña dividida en dos, especialmente por las imágenes que resbalan de la mano del colonizador. De un lado, brotan como aguas turbulentas los actores del Estado; del otro, y con igual fuerza, una chiva que asciende con alas y una flecha que apunta hacia el pasado, acompañada de manifestantes, primeras líneas, carteles, latas, tambores. La ilustración de Dubinín es un cuadro de la existencia de un litigio, expresa la fractura de lo común en la comunidad. El acto contencioso, podría convertirse en un acto de la política, si y solo si pone en evidencia la definición de los que no tienen parte en lo común de la comunidad: la palabra compartida.

Figura 3. “Volveré y seré millones” de Dubinín



Fuente: archivo propio 2021

### *La solidaridad y el Estado*

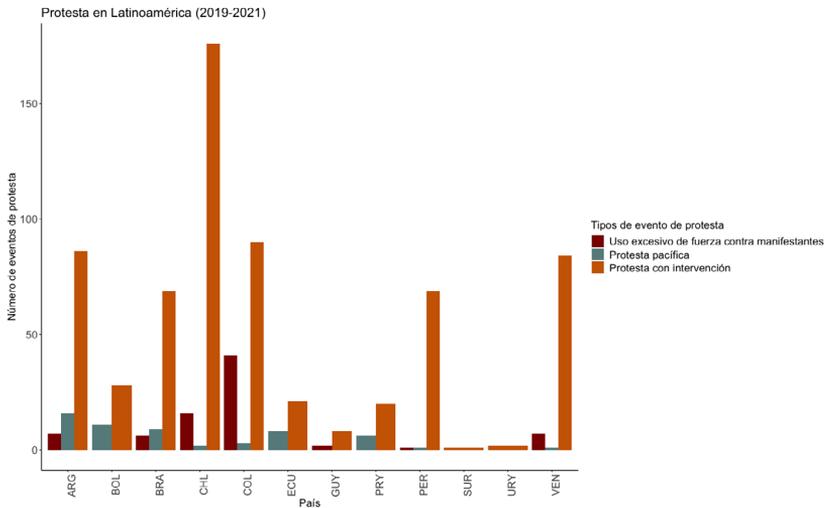
Desde el primer lunes de mayo, la minga indígena, mas no la fuerza pública, acompañó la movilización como principal garante y cuidadora de la vida, en Bogotá, en Medellín, en Ibagué y en Cali. El 5 de mayo, en Medellín, la Asociación Nacional de Cabildos Indígenas hizo parte de la primera línea de la manifestación pacífica para cuidar a las y los manifestantes de las agresiones de la policía en el Parque de la Resistencia. El 6, en Popayán, la guardia indígena organizó y acompañó la Caravana Humanitaria, proveniente de Villa Rica, Cauca, para velar y garantizar la llegada de los insumos y víveres a la ciudad. El 7, el pueblo misak tumbó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en el centro de Bogotá y bautizó la avenida Jiménez como avenida Misak. El mismo día, en Cali, la guardia indígena “logró retener a un hombre[,] quien se movilizaba en una camioneta blanca en compañía de otros sujetos que abrieron fuego contra los manifestantes y defensores de DDHH en el sector de La Luna en Cali”, según lo reportó Prensa Comunitaria vía Facebook (Diario de campo 1).

El 3 de mayo fue el día en el que se registró el mayor número de casos de violencia homicida a manos de la Policía Nacional (Indepaz y Temblores 2021). A Nicolás Guerrero lo asesinaron la madrugada del 3 de mayo en una velación en Paso del Aguante, antes Paso del Comercio, en Cali. Al caer la noche, en la misma ciudad, los policías ingresaron al barrio Siloé con armas de fuego. Entre el 3 y 4 de mayo se registraron 14 homicidios en la ciudad de Cali (Indepaz y Temblores 2021). El 5 de ese mes, en Pereira, hombres armados dispararon a los y las manifestantes que se encontraban en el viaducto César Gaviria. Allí asesinaron a Lucas Villa.

La historia de la movilización social en Colombia también es una historia de la desmovilización ante la represión civil y la instrumentalización del derecho a protestar (Cruz 2015). Después de los desmanes ocurridos en el paro cívico nacional de 1977 (PCN), se avaló el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, que permitió la persecución política contra las fuerzas de oposición y todo tipo de manifestación pública (Cruz 2015). Mauricio García resalta que, entre 1949 y 1991, “Colombia vivió más de 30 años bajo estado de sitio” (2008). Estas medidas sobrevaloraron la actuación de las fuerzas armadas en los asuntos públicos del país y su participación directa en los procesos de movilización social. Precisamente, Francisco Gutiérrez Sanín ha llamado *la anomalía colombiana* la pervivencia de una democracia formal con altos niveles de represión, similares o superiores a los de las dictaduras más duras de Latinoamérica (Gutiérrez 2014).

Como se puede observar en la Figura 4, en un desglose de tipos de protesta, Chile presenta un mayor número de casos con intervención policial, mientras que Colombia reúne el mayor número de eventos en los que se evidencia el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes entre 2019 y 2021.

**Figura 4. Tipos de protesta en Latinoamérica 2019-2021**



**Fuente:** elaboración propia a partir de datos de Aclad (2023).

Así como se pusieron en práctica repertorios de la acción colectiva como bloqueos, plantones y marchas, también hubo los repertorios estatales ya conocidos, como toques de queda y represión civil. El 12 de mayo, el Esmad usó por primera vez el arma Venom en Popayán, un proyectil que lanza múltiples municiones en cuestión de segundos desde el techo de las tanquetas policiales (El Espectador 2021). Entre el 13 y el 15 de mayo, la fuerza pública enfrentó a los manifestantes de Buga, Valle del Cauca, durante 50 horas seguidas (Radio Nacional de Colombia 2021). Durante la noche del 13, un habitante del municipio lo publicó en su cuenta privada: “siendo las 8:40 p.m. Los chicos de Buga han aguantado 16 horas de ataques masivos del Esmad en el puente del Sena Buga” (Diario de campo 1). La misma práctica sucedió en La Plata, Huila, el 16 de ese mes; en Caldas, Antioquia y Yumbo, Valle del Cauca, en el 17; y luego en Bogotá, en el Portal Resistencia y el espacio humanitario Al Calor de la Olla, desde el 19.

El dolor por la muerte violenta e injusta animó el reclamo digno por los seres queridos. Desde los primeros días del paro, hubo velatones en Puerto Resistencia, Calipso, Puerto Madera, en la naciente Loma de la Dignidad, todos en la ciudad de Cali, y también en Bogotá, en Medellín

y las ciudades en movilización. Durante la Marcha de Mujeres por la Vida en Cali, el 8 de mayo, una cantaora del Pacífico les reclamó a los policías en Puerto Resistencia por los manifestantes fallecidos, a quienes no conocía, pero que igual dolían en su vientre como si fueran sus hijos (Diario de campo 1). También sorprendió la acción de un grupo de usuarios de internet llamado K-Popers, fanáticas y fanáticos del pop coreano, quienes compartieron con frenesí las emisiones en vivo y videos relacionados con el paro, titulados con el numeral #sosColombia para asegurar su reproducción masiva en las plataformas virtuales. Fueron un actor clave en la reproducción de vídeos en los que se denunciaba la violencia policial.

### *La memoria*

Durante la movilización, las y los manifestantes utilizaron las fachadas y las medianeras abandonadas para expresar el descontento. Las *pintas* o murales cambiaron con el transcurso del paro, con el rechazo *antiuribista* al gobierno, la denuncia por la violencia policial de un “Estado genocida” y de la presunta violación de Alison Meléndez en Popayán: “¡Vivas nos queremos!” El movimiento juvenil en Cúcuta, entre el 6 y el 9 de mayo, aprovechó las paredes de los deprimidos para pintar “Gobierno psicópata”. El 7 de mayo, simpatizantes del gobierno lo pintaron de blanco. Colombia Informa, @Col\_Informa, así lo reportó en redes:

Cuatro sujetos en tres vehículos taparon el mural “Nos están matando”, que realizó el movimiento juvenil en el marco del Paro Nacional. Horas antes, estos jóvenes fueron amenazados de muerte por un sujeto que iba en un vehículo sacando un arma de fuego. (Diario de campo 1)

Al siguiente día, el movimiento juvenil pintó “Quieren callarnos”. En una entrevista para el medio Colombia Informa, los jóvenes propusieron “pico y placa” para el muro: “unos días los uribistas lo pintan de blanco y otro día venimos nosotros” (Diario de campo 1). La discusión en torno a las “pintas” no es una discusión por un muro, sino por los valores y mensajes que pondera. Como lo explica Touraine, es una disputa en torno a los patrones culturales dominantes, una lucha por el significado (1985).

El derribo de estatuas de próceres de la nación, políticos y colonizadores fue un repertorio recurrente durante el primer mes del paro. Primero, el 1 de mayo, cayó Belalcázar en Cali y Antonio Nariño en Pasto; el 5 de ese mes se derribó el busto de Francisco Fernández de Contreras, en Ocaña, y el 7 mayo el pueblo misak destituyó a Gonzalo Jiménez de Quesada como referente histórico del centro de Bogotá. Para Marta Saade, la manifestación “momifica los relatos de la historia, y con distintos actos que van narrando cómo caen estatuas y se proponen otros referentes en Colombia, en medio de disputas por el valor consagrado en el patrimonio” (Saade y Benavides 2022). Se podría argumentar que este repertorio plantea la transformación de los símbolos de la memoria nacional del país. La movilización bautizó las plazas principales de las ciudades en un nuevo horizonte político. Después de derribar a Belalcázar, AISO publicó en sus redes sociales, “vamos a tumbar los símbolos del genocidio y levantar la memoria de los pueblos” (Diario de campo 1).

El derribo de estatuas permitió la apertura al diálogo sobre lo que recordamos y exaltamos como país. Los y las manifestantes cuestionaron el uso de la colonización como punto de partida de la historia nacional. El 6 de junio de 2021 ingresó el grupo delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como veedor internacional de la protesta social en Colombia (Diario de campo 1). El mismo día, el pueblo misak marchó en compañía de diferentes sectores sociales hacia el aeropuerto para recibir a los y las delegados de la CIDH. El curso de la marcha fue detenido por la Policía a la altura de las estatuas de Isabel la Católica, y Cristóbal Colón, un par de figuras pingorotudas que reciben y despiden a los turistas que transitan la ciudad. Colombia Informa, @Col\_Informa, reportó en Facebook: “Indígenas Misak que se dirigían a recibir a la @ CIDH fueron interceptados por la policía sobre la Av. Calle 26. Exigen al secretario de gobierno se respete el derecho a la libre movilidad y a la protesta legítima” (Diario de campo 1). Entre el 6 de junio y el 9 de junio, la movilización intentó derribar ambas estatuas y elevar el nombre de los pueblos indígenas. El 10 de junio, la Alcaldía de Bogotá “retira los monumentos a Colón e Isabel la Católica Corona en Bogotá tras ataques de indígenas” (Voz Populi 2021). En paralelo, las instituciones abrieron el diálogo sobre los monumentos entre manifestantes, Ministerio de Cultura y sociedad.

También sorprende la reproducción de la cifra “6.402” durante el paro. En febrero de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó un auto decisivo sobre el transcurso de la investigación de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, también conocidos como falsos positivos (Jurisdicción Especial para la Paz 2021). En el oficio, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad presentó un estimado de 6.402 posibles “falsos positivos”, cifra que triplicó el número estimado antes de la apertura del caso. Esta cifra fue grafiteada y reproducida en muros y edificaciones, en las avenidas y en los paraderos de bus. El 4 de junio, se creó el croquis de los 6.402 falsos positivos por la carrera séptima de Bogotá, y @somoscauca reportó una “intervención gráfica de 3 km de longitud aprox que inicia en la plaza de Bolívar por la Cra 7ma (sic) y sigue por la Av 26 hasta el centro de Memoria Paz y Reconciliación. [Dedicado a quienes ya no están con nosotros], que en realidad ya se había hecho en Buenaventura” (Diario de campo 1).

A la caída de iconografías la acompañó la emergencia de códigos y símbolos del conflicto armado que difícilmente tienen visibilidad en la esfera pública del país, como lo anota la Comisión de la Verdad en su *Informe final* (2022). La movilización demostró un derroche de estrategias creativas y llamativas para evidenciar la crisis social del país. Durante las movilizaciones del 28 de mayo en Bogotá, los y las manifestantes adhirieron calcomanías a los paraderos del Sistema Integral de Transporte, haciendo uso de los números de los buses para indicar el número de masacres ocurridas en el año, el número de violaciones de derechos humanos o el número de colombianos en situación de pobreza (Figura 5).

**Figura 5. 7.4 millones de colombianos subsisten con menos de \$145.000 [pesos] al mes**



**Fuente:** Tomado del chat masivo “Colombia Informa” (2021)

### *Las asambleas*

En la madrugada del 4 de mayo, en Sameco, Cali, la asamblea de ciudadanos de la comunidad decidió “no perjudicar a los tenderos de Cali y decidieron controlar el ingreso del comercio”, según lo transmitió en directo el Canal 2 de Cali, vía Facebook -@Canal2cali (Diario de campo 1). El 6 de mayo, Popayán recibió una caravana humanitaria proveniente de Villa Rica, y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) declaró en Twitter: “Miles se volcaron a la autopista a recibir los insumos, apoyando el #ParoNacional6M y respaldando esta iniciativa que la #GuardiaIndígena y los pueblos indígenas acompañaron a lo largo de la jornada” (Diario de campo 1).

Las asambleas emergieron en el paro desde un primer momento, no como resultado de la movilización, sino como un tipo de acción colectiva al que recurren las organizaciones para abonar a la discusión

nacional con una respuesta local. En Chile, las asambleas territoriales fueron más recurrentes a medida que el estallido social avanzaba, cuyas discusiones permitieron un renovado análisis sobre la participación de la ciudadanía en la política (Valenzuela 2022). En el estallido colombiano, registré la primera asamblea popular el 2 de mayo, en Palmira, Valle, como espacio de integración, consenso y acción respecto a la situación departamental. En ese primer encuentro, la asamblea se propuso organizar pliegos de demandas para establecer un diálogo municipal y directo con la alcaldía, con el fin de reducir el malestar social. El encuentro fue transmitido a través de una sesión en línea y en directo a través de Facebook Live, en la página de la Asamblea Popular de Palmira (Diario de campo 1).

Con este mismo carácter, entre el 6 y el 11 de mayo, los diferentes puntos de resistencia de Cali –bloqueos de diferente índole– grabaron sus denuncias y demandas, que quedaron registradas en emisiones en directo alojadas en las redes sociales (Diario de campo 1). La articulación tomó fuerza el día 11, con la asamblea popular realizada en la Universidad del Valle. Allí se reunieron por primera vez diferentes voceros de los puntos de resistencia y presentaron las demandas reunidas en un documento compartido. También se presentaron varias organizaciones indígenas, feministas, campesinas, afro y demás colectivos de ambientalistas, profesores y profesoras, sindicalistas, deportistas, músicos y músicas, de grupos de defensores de los animales y mesas territoriales, según lo transmitió en vivo por el Proceso de Comunidades Negras en Colombia desde su cuenta @ PCN (Diario de campo 1). Esta juntanza inspiró la asamblea nacional popular que se llevó a cabo en Bogotá hasta principios de junio y luego se replicó en la ciudad de Cali. También para el 6 de mayo ya se habían desarrollado asambleas populares en Pamplona, Santander, y Neiva, Huila.

### *La juntanza*

Entre el 12 y 27 de mayo, en los registros del diario de campo aparece un concepto recurrente: la *juntanza*, que se utiliza como sinónimo de reunión y asociación, pero también como sujeto. Los y las manifestantes se refieren a la juntanza en calidad de actor social. La revista *Hekatombe* tuiteó el 24 de junio: “está presente la juntanza de mujeres de suroccidente: una nueva expresión organizativa que nace

del Estallido Social” (Diario de campo 1). También se les llama juntanza a los plantones, reuniones, cineforos y marchas, y los y las manifestantes también lo utilizan como locución adverbial: “en el departamento de Cesar, las mujeres se organizan en juntanza” (Diario de campo 1). De manera incipiente, se podría argumentar que la juntanza es tanto actor social como su forma de la acción, que exalta la asociatividad, la reunión y la convocatoria por fuera los aparatos institucionales. Estas tres cualidades no son menos interesantes, si se tienen en cuenta los limitantes del derecho a protestar en Colombia (Cruz 2015).

Uno de los escenarios de juntanza más relevantes fueron los bloqueos. Las barricadas estaban organizadas por la primera, segunda y tercera línea, hasta sexta y séptima, que consideraba organizaciones virtuales. En un punto de resistencia de Cali, una vecina del sector La Luna me comentó el 3 de junio que los vecinos y habitantes de la zona contribuían con recursos para la continuidad del bloqueo, dado que su lucha era para “el bien de todos” (Diario de campo 1). Por otro lado, estos puntos incidieron en la regulación de la gasolina, los alimentos, los víveres, el fútbol y las calles. Por ejemplo, en la vía al Catatumbo, Norte de Santander, campesinos y campesinas mantuvieron sus bloqueos en la carretera durante tres meses. Durante el primer mes del paro, solo permitían el paso de alimentos, medicinas y otros servicios básicos. Este mismo panorama se extendió sobre todo el suroccidente, desde la entrada a la vía Panamericana en Valle del Cauca, pasando por todos los principales municipios que están a la altura de la vía que conecta Buga, Palmira, Cali, Jamundí, Santander de Quilichao, el peaje de Tunía en el Cauca y la entrada a Popayán.

Otro escenario significativo fue el fútbol, una actividad tan pública como las vías. El 12 de mayo, el gobierno anunció que no existía amenaza alguna contra el desarrollo de la Copa América en Colombia, que se realizaría entre el 11 de junio y 10 de julio. Los hinchas del América de Cali, Deportivo Cali, Millonarios, Santa Fe, Junior, Nacional, Deportes Tolima se opusieron a esta decisión. Ese mismo día, el 12 de mayo en Bogotá, la Barra Disturbio Rojo salió a las calles a apoyar el paro nacional. Reclamaban paz y justicia para las víctimas del paro. “No se juega porque el pueblo es más importante”, decían.

El 13 de mayo, durante un partido en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, manifestantes se reunieron a los alrededores del estadio

para reclamar que en “[Barran]Quilla no se juega”. El Esmad y la policía reprimieron la manifestación durante los 90 minutos del juego. Los gases alcanzaron a entrar a la cancha y los jugadores tuvieron que detener el partido unos instantes por los efectos de los químicos esparcidos. A partir de ese momento, tomó fuerza la consigna “Si no hay paz, no hay fútbol”. El 16 de mayo hubo una masiva protesta de barras de fútbol en todo el país. En Cali, en la Loma de la Dignidad, se juntaron las barras de los equipos del América de Cali y Deportivo Cali “en torno a un solo color, el de la resistencia” (Diario de campo 1). En Armenia y Villavicencio se juntaron las barras del América de Cali, Atlético Nacional y Deportes Quindío. Una marcha con tintes azules, rojos y verdes, según la cuenta de Twitter oficial de Millonarios, @MillosDColombia (Diario de campo 1).

Las transmisiones en vivo por internet también dan cuenta del activismo virtual en la acción conectiva. Esta función sirvió para compartir durante dos meses las marchas, las pintas, así como la toma de los puntos de resistencia, la defensa de estos puntos, las actividades que se desarrollaban en tiempo real en los bloqueos o espacios humanitarios, pero, sobre todo, para mostrar la acción policial en estos espacios. El 11 de mayo, en el espacio humanitario al calor de la olla, una de las personas presentes, ante la represión policial, gritaba con angustia durante una transmisión en vivo: “¿Pero si está grabando el *live*?, ¡grábelo, grábelo!”. En el mismo momento, un defensor de derechos humanos le dijo a un policía: “yo solo he estado grabando, déjeme quieto, 8.800 personas están viendo la redada a los muchachos” (Diario de campo 1). El hostigamiento de la policía en contra de los y las manifestantes que se encontraban en el espacio humanitario Al calor de la Olla fue registrado por 8.000 personas de manera virtual. Estas funciones son relevantes en relación con el acontecimiento, porque son registros virtuales y también espacios virtualmente compartidos. Los bloqueos se sostuvieron gracias a la solidaridad desplegada en las redes sociales, una solidaridad concreta extendida en la virtualidad.

La movilización no solo incidió en lo común de la palabra, sino en lo común de los espacios (Saade y Benavides 2022). Por tal motivo, no hace referencia a un espacio público, propio del Estado, sino al espacio común volcado de sentido por la comunidad, en el que interactúan las relaciones más concretas de seres humanos y no humanos, como el *barrio* o una *vía* o el *parque*. Para Saade y Benavides (2022), estos espacios comunes

entran en crisis ante la disputa por el sentido, en procesos de extrema neoliberalización y privatización de todos los recursos. Las medidas gubernamentales para mitigar la reproducción de la pandemia durante todo el 2020 solo agudizaron estos procesos de privatización del espacio público con extremas medidas de aislamiento y cuarentana.

### *Los burladeros*

El 28 de mayo, los bancos de la ciudad de Popayán instalaron *burladeros* en sus puertas para proteger el establecimiento de los “actos vandálicos”. Los burladeros son artefactos propios de las plazas de toros que sirven como estructuras de protección. En cada arena, se construyen cuatro burladeros desde donde matador y peones observan la posible embestida del animal. También se construyen algunos muy especiales para los espectadores de confianza. El torero suele usarlos para resguardarse, cuando subestima la magnitud de la fuerza de su retador.

El mismo día de los burladeros, el gobierno decretó la coordinación de alcaldes y gobernadores con militares y policías para levantar los bloqueos y recuperar la *movilidad* y la *productividad* del país (Decreto 575 de 2021). Este decreto ubicaba en el mismo nivel la intervención de las autoridades locales con las instituciones de la fuerza pública. La discusión giró únicamente alrededor de si los bloqueos eran formas legítimas o ilegítimas de la movilización y la protesta. Aumentaron las persecuciones y detenciones, se levantaron bloqueos en la madrugada, se designaron militares en las esquinas, en los puentes y en las calles, cada uno con un arma en el pecho. Un manifestante exclamó en su cuenta privada sobre la movilización del 28 de junio en Cali: “ayer fueron casi 8 horas de represión continua” y “ni la brigada médica se salvó”, pues “emboscaron a los jóvenes, gasearon hasta los callejones”, por lo que “enardecida la comunidad, cerca de tres mil personas retomaron el lugar y el Esmad se fue justo cuando llegaron los vándalos”, en referencia a personas vestidas de civil con porte de armas (Diario de campo 1). Así mismo, se registró una disminución de bloqueos en el Valle del Cauca: de los 20 puntos que se extendieron en el departamento, la página de la gobernación en Twitter, @Gob\_Valle, aseguró el 29 de mayo que solo persistían cuatro en las vías intradepartamentales (Diario de campo 1).

Sin embargo, el 29 de mayo ocurrió un suceso relevante para el estudio de los resultados de la movilización en la vida pública. A través

de *memes*, videos, fotos, los usuarios de internet hicieron un llamado a la inscripción de cédulas en la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones de 2022. Así mismo, desde el 31 de ese mes hubo una proliferación de asambleas, cabildos abiertos y ejercicios de reflexión *barrio adentro* en las ciudades del país; por ejemplo, la gran Asamblea Nacional Popular en Bogotá, del 7 al 9 junio, y el Paro Barrio Adentro en Siloé, al oriente de Cali, el 12 de junio. El 1 de junio, el alcalde de Cali firmó el Decreto 4112.010.20.0304 de 2021, en el que reconoció a la Unión de Resistencias Cali, organización en la que se reúnen todos los puntos de resistencia de la ciudad, como un actor de acuerdos, un actor con voz.

#### CONCLUSIONES: EL CONSENSO SOCIAL

Después del paro cívico nacional (PCN) de 1977, diferentes autores coincidieron en que los paros cívicos en Colombia se asemejan a los nuevos movimientos sociales (NMS) que emergieron a escala global desde 1960 (Carrillo 1981), especialmente por su base social heterogénea y su capacidad de asociación a través de la recuperación de la esfera civil, como un nuevo locus de la acción política (Pichardo 1997). Fernando Rojas, a propósito de los PCN de 1977, 1982 y 1985, argumenta que se trató de un tipo nuevo de movimientos sociales que no pueden ser encasillados en las formas organizativas ya reconocidas, pues buscan un tipo de cohesión nacional que desborda los mecanismos de movilización de los movimientos populares. Señala que, en todos los casos, lograron reunir las diferentes formas de asociación voluntarias del país, “empleados y desempleados, sindicalistas y no sindicalistas, colonos y minifundistas, mestizos e indígenas coinciden en estos movimientos cual espectadores en un estadio de fútbol que tuviera una sola tribuna” (1985, 245).

*Como primera conclusión, considero que los paros nacionales no pierden el carácter cívico con el que surgen.* Como lo demuestra el trabajo etnográfico, las organizaciones formales y no formales de la sociedad civil participaron al lado de movimientos populares e históricos durante el último paro nacional. Los canales de comunicación de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, tuvieron un papel clave en la difusión de la información. Entérate Pradera es una página de difusión del municipio del Valle que durante el paro se volcó exclusivamente a orientar al público sobre lo que ocurría durante la movilización. De hecho, desde el 24 de mayo de 2021, motivaron la participación de la

ciudadanía en las mesas de diálogo y concertación con las entidades gubernamentales, para construir un acuerdo con personería municipal, manifestantes, organizaciones y testigos.

La condición civil presupone un consenso social, un acuerdo. Para comprender el sentido de la acción comunicativa en la sociedad, es decir, la construcción de un acuerdo, Habermas (1987) distingue los subsistemas político y económico del mundo de vida. Este último es un escenario estructurado lingüísticamente del cual emerge la diferenciación social: la cultura, la personalidad y la sociedad. Los mundos de vida solo se basan en recursos sociales, principalmente en la acción comunicativa que permite su estructuración. El subsistema político y el económico, en cambio, se institucionalizan a través de un *media*, como el poder político o el dinero, que logra la presión externa a través de una acción estratégica de tipo ideal. La direccionalidad del poder permite el autocierre del sistema, como un mecanismo hermético. El mundo de vida, basado en una acción comunicativa, solo se puede constituir en la solidaridad, que está lejos de ser un recurso con direccionalidad, pues no puede someter a otros. La solidaridad es una habilidad “para responder a otros e identificarse entre sí”; se trata del “deseo de compartir la suerte del otro en la propia persona” (Cohen y Arato 1992, 523). Desde este enfoque, la sociedad civil se entiende como un mundo de vida estructurado lingüísticamente (discurso) y, por lo tanto, culturalmente, capaz de construir acuerdos (solidaridad) a través de la institucionalización de las normas (derechos) (Cohen y Arato 1992).

La traducción de esta sociedad civil a Latinoamérica no ha sido sencilla, pues arrastra consigo su noción liberal, en términos de derechos y obligaciones individuales que están por encima de cualquier otra noción colectiva de participación. Para Oxhorn (2017), se trata de un modelo basado en una *noción densa del consenso social* que da por sentado el conflicto, pues supone un acuerdo mutuo y homogéneo entre los miembros que participan en ella. La incidencia de movimientos étnicos, campesinos y populares en la agenda pública y en las transiciones democráticas de la región ha abierto una vía para comprender relaciones indeterminadas entre la transición cívica/incívica que rompen con la marcada distinción de la sociedad civil como un espacio homogéneo e imparcial, hacia un espacio controvertido (Álvarez et al. 2017). Oxhorn propone bajar un poco la vara en el estudio de la sociedad civil en Latinoamérica. Dice

que no es un problema de esta “fábrica social” en sí, pues se trata de una relación propia entre la sociedad y los Estados liberales. El autor plantea una revisión colectivista de la sociedad civil, entendida esta como “el entramado social formado por una multiplicidad de unidades autoconstituidas basadas en territorios y funciones, que coexisten pacíficamente y resisten colectivamente la subordinación al Estado, al mismo tiempo que demandan su inclusión en las estructuras políticas nacionales” (1995, 251-252).

Oxhorn aborda el concepto de sociedad civil a la luz de la experiencia latinoamericana, que ha logrado construir consensos mínimos entre la ciudadanía y los gobiernos para transitar de periodos autoritarios o de conflicto armado hacia la política y la democracia. Su perspectiva colectivista considera la continuidad del conflicto como inevitable, pero también “la imposibilidad de tener éxito mediante medios violentos en lugar de rechazar la violencia” (2017, 71). El autor considera que la sociedad civil se basa en un *consenso social mínimo* compuesto por dos partes. Primero, sus miembros se identifican con alguna “unidad definida geográficamente asociada con algún sentido de bien público”, aún si existen desacuerdos; y segundo, “se acepta el derecho de otros actores sociales a competir por influencia política en la definición de ese bien público sin amenaza de violencia” (2017, 75).

Para colectivizar la sociedad civil se requiere un mínimo consenso en el que los actores sociales puedan definir y defender sus intereses colectivos en la competencia por la definición de los bienes públicos. Así mismo, es preciso que estos grupos, de acuerdo con sus diferentes identidades, pueden desarrollar parte de su acción colectiva en la esfera civil. Se hace necesario, por tanto, comprender la regulación de esta *competencia de definiciones* en el paro, en ocasiones limitada por la represión civil ejercida por el Estado y por ciudadanos armados. Si el paro nacional favoreció la “colectivización de la sociedad civil”, el país ganó mecanismos de resolución de conflicto de forma no violenta.

Propongo entender esta capacidad de los actores para participar en las definiciones de un bien público como *poder civil*, concepto que se ha entendido como la fuerza que retiene el pueblo o la sociedad en su relación con el Estado, que logra influir en la agenda pública y en el horizonte político de los regímenes democráticos (Alexander 2006; Urbinati 2008). Siguiendo a Oxhorn, considero que el poder civil es la

capacidad semántica que retienen los actores sociales para participar en las definiciones de bienes públicos y derechos. Al igual que el estudio lingüístico, las personas comparten un lenguaje, en la medida en que participan en las definiciones del significado. No solo basta al memorizarlo, sino también al hacer uso de él y comprender su alcance. Este tipo de poder emerge si la relación entre Estado y sociedad posibilita la competencia entre los actores sociales para influir en la agenda pública (Cohen y Arato 1992).

En el caso colombiano, los sectores de la sociedad civil han demostrado mayor interés en la resolución del conflicto que las mismas élites políticas. En palabras de Archila, “a pesar de la degradación de la violencia y de los efectos negativos que tiene para la sociedad civil, [...] la gente no se resigna y trata de jugar un papel activo, al menos para protegerse de sus devastadores efectos” (2006, 27). Considero que las organizaciones, comunidades y grupos subalternos que participaron en el paro de 2021 lograron construir esta capacidad semántica para contribuir en la definición, a partir de sus intereses colectivos, de consensos mínimos, como una reforma o una estatua ubicada en la calle. En esta última movilización, una parte de la sociedad logró un consenso sobre la inviabilidad de la reforma tributaria propuesta por el gobierno. No es un acuerdo menor, en un país como Colombia, que tanto le ha costado construir acuerdos entre la sociedad y el Estado. Ahora bien, además de revertir la reforma, también logró una discusión nacional sobre el espacio público y sus usos, desde los murales y sus mensajes, hasta las banderas, estatuas y monumentos nacionales, como vimos con Belalcázar o Colón, o el cambio de denominaciones de las calles, plazas y avenidas principales. Ahora bien, la emergencia de asambleas y mesas de diálogo y concertación a nivel municipal permitió la construcción de mínimos acuerdos sobre bienes públicos. A diferencia de lo que ocurrió entre gobierno y representantes del paro, las mesas municipales y de localidades en las ciudades se disputaron este poder civil en la construcción de acuerdos políticos sobre las demandas. El municipio de Ricaurte, Nariño, líderes y lideresas del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari) instalaron una mesa con el ministerio del Interior desde la primera semana de mayo en la que se discutieron once temas de interés público para el municipio. En Pradera, Valle del Cauca, el primer acuerdo fue sobre los bloqueos y luego sobre una política

pública del municipio. En Santa Leticia, Cauca, corregimiento de Puracé, jóvenes y líderes campesinos consolidaron una mesa de participación ciudadana con las entidades gubernamentales en donde se discutieron temas de tierras, emprendimiento, salud, educación, víctimas. Mujeres y jóvenes fueron los principales ponentes sobre la necesidad de diseñar y desarrollar emprendimientos en turismo, en una región de páramos que fue golpeada por el conflicto armado.

En este sentido, y *como segunda conclusión, considero que los paros siguen siendo un mecanismo social relevante en la sociedad colombiana para influir y ejercer presión sobre el sistema político*. Según el Centro Nacional de Consultoría (2021), 73 % de las personas encuestadas estaba de acuerdo con la protesta social a mediados de mayo, pese a que un 60 % aseguraba haber sufrido alguna afectación por las actividades de la movilización. “Ciertamente, la existencia de la protesta por sí sola no es suficiente para proteger o fortalecer la democracia” (International IDEA 2023, 43) y se requieren mecanismos que aseguren la participación efectiva de los movimientos sociales y de las organizaciones formales y no formales de la sociedad civil en la democracia. Sin desconocer su carácter radical, el último paro nacional develó la construcción de un poder civil, un ejercicio de participación y competencia entre los actores sociales por definiciones de los bienes públicos y los derechos del país. Esta competencia se trasladó al campo de la protesta, en la construcción de asambleas, encuentros, mesas de diálogo y juntanza, alejándose resueltamente de la insurgencia armada y la toma de armas. Esa capacidad de asociación ha puesto en tela de juicio la sobrevaloración de la fuerza pública en la toma de decisiones políticas. El 1 de diciembre de 2023, por ejemplo, se llamó a juicio a cuatro agentes del Esmad por el uso del arma Venom en Popayán (El Tiempo 2023). Colombia merece crear un mayor número de mecanismos de resolución del conflicto de forma no violenta, como la colectivización de una sociedad civil con capacidad de participación en los consensos sociales.

La literatura coincide en que es demasiado pronto para identificar los resultados de los estallidos latinoamericanos en el sistema político (Fuentes-Nieva y Nelli 2017; González y Le Foulon 2020). Los autores y las autoras aseguran que hace falta un proyecto político que vincule los diferentes intereses que emergen en este tipo de movilizaciones. Para Murillo (2021), estas movilizaciones no tienen una direccionalidad única,

lo que hace difícil la consolidación de un proyecto político sobre la forma institucional de la democracia. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre sobre los resultados institucionales, hay mayores expectativas respecto de la capacidad de los estallidos en la dinamización de la vida pública. Pachón Soto encuentra que se trata de un acontecimiento disruptivo, crítico con el sistema político, las jerarquías, los modelos establecidos, en el que emergen nuevas subjetividades (2022).

En línea con este autor, por lo menos para el caso colombiano, considero que el estallido social logró influir en la agenda pública a través de mínimos consensos. El último paro nacional develó la capacidad de la sociedad colombiana para construir un mínimo acuerdo sobre el tributo en medio de un desacuerdo nacional. No quiero con ello asegurar que las movilizaciones sociales contemporáneas determinan la toma de decisiones, sino que son parte fundamental de los sistemas de representación (Urbinati 2008). Forman parte de lo que Rosanvallon denomina el conjunto de controles y equilibrios que garantizan que “la sociedad tenga una voz, que los sentimientos colectivos puedan articularse, que se puedan formular juicios sobre el gobierno y que se puedan presentar demandas” (2006, 6).

El abordaje etnográfico me permitió ahondar en dos categorías analíticas principales que complejizan la heterogeneidad de la base social de la movilización: el desacuerdo y el consenso. Esta oposición guarda una discusión clásica de las ciencias sociales que coincide con la dicotomía entre particular-universal en la relación sociedad-Estado. Es una brújula analítica que está presente en el cambio social. ¿Cómo podemos vivir en comunidad en medio de la diferencia? En contraste con la literatura producida hasta el momento sobre los estallidos sociales en la región, propongo retomar esta discusión, para profundizar en el papel de este tipo de movilizaciones en la sociedad y en la vida democrática del país.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACLED—The Armed Conflict Location & Event Data Project. 2023. *Latin America and The Caribbean*. <https://acleddata.com/latin-america-and-the-caribbean/>
- Alexander, Jeffrey. 2006. *The Civil Sphere*. Oxford-New York: Oxford University Press.
- Archila, Mauricio. 2006. “Los movimientos sociales y las paradojas de la democracia en Colombia”. *Controversia* 186: 10-32. <https://revistacontroversia.com/index.php/controversia/article/view/175>

- Barbosa, Johanna y Julián Felipe Sánchez. 2021. “Panorama socioeconómico de Colombia antes y durante la Covid-19”. *Revista Intercambio* 2, 5: 98-121.
- Bennett, W. Lance y Alexandra Segerberg. 2012. “The Logic of Connective Action: Digital Media and The Personalization of Contentious Politics”. *Information, Communication & Society* 15, 5: 739-68. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Carrasquilla, Alberto. 2021. Ley de Solidaridad Sostenible. <https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/LeySolidaridad>
- Carrillo, Jaime. 1981. *Los paros cívicos en Colombia*. Bogotá: Oveja Negra.
- Centro Nacional de Consultoría. 2021. “Paro Nacional 2021”. Encuesta. Colombia. [https://www.centronacionaldeconsultoria.com/files/ugd/c967c2\\_831ee5ebd89247a8bf1b3eda5205c68f.pdf](https://www.centronacionaldeconsultoria.com/files/ugd/c967c2_831ee5ebd89247a8bf1b3eda5205c68f.pdf)
- Cohen, Jean y Andrew Arato (eds.). 1992. *Sociedad civil y teoría política*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Comisión de la Verdad. 2022. *Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia. Hay futuro si hay verdad. Informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición*, t. 2. Colombia: Comisión de la Verdad.
- Creswell, John. 2015. *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. Los Angeles: SAGE.
- Cruz, Edwin. 2015. “El derecho a la protesta social en Colombia”. *Pensamiento Jurídico* 42: 47-69.
- Cruz, Edwin. 2016. “El ciclo de protesta 2010-2016 en Colombia. Una explicación” *Jurídicas* 12, 1: 31-66.
- Cruz, Edwin. 2017. “La rebelión de las ruanas: el paro nacional agrario en Colombia”. *Análisis* 49, 90: 83-109. <https://doi.org/10.15332/S0120-8454.2017.0090.04>
- Cruz-Rodríguez, Edwin. 2022. “Las movilizaciones sociales durante el gobierno de Iván Duque. Colombia, 2018- 2022”. *Cambios y Permanencias* 13, 2: 1-18.
- El Espectador. 2021. “Bloqueos hacen parte de posibilidades legítimas para las protestas: Comité del Paro”. *El Espectador*, Política, 28 de mayo. <https://www.elespectador.com/politica/bloqueos-hacen-parte-de-posibilidades-legitimas-para-protestas-comite-del-paro/>
- El País. 2021. “Duque cede a las protestas y retira la reforma tributaria de Colombia”. *El País*, Internacional, 2 de mayo. <https://elpais.com/internacional/2021-05-02/el-presidente-de-colombia-retira-la-reforma-tributaria.html>

- El Tiempo. 2021. “Gobierno reclama a CIDH por no condenar los bloqueos”. *El Tiempo*, Mundo, 29 de mayo. <https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/gobierno-reclama-a-cidh-por-no-condenar-los-bloqueos-591875>
- El Tiempo. 2023. “Abren investigación a miembros del Esmad por uso de Venom en Popayán”. *El Tiempo*, Colombia, 4 de diciembre. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/integrantes-del-esmad-son-investigados-por-danos-a-traves-de-polemica-arma-832087#:~:text=Cuatro%2ointegrantes%2odel%20antiguo%20Escuadr%C3%B3n,Nacional%2ode%202021%20en%20Popay%C3%A1n>
- Fuentes-Nieva, Ricardo y Gianandrea Nelli. 2017. “Los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, la evolución de su papel e influencia, y su creciente fuerza”. *Revue Internationale de Politique de Développement* 9 [Online]. <https://doi.org/10.4000/poldev.2511>
- García, Mauricio. 2008. “Un país de estados de excepción”. *El Espectador*, Política, 10 de octubre. <https://www.elespectador.com/politica/un-pais-de-estados-de-excepcion-articulo-43317/>
- González, Fernán. 2022. “La crisis de representación de la sociedad colombiana. Un intento de análisis político del Paro Nacional de 2021”. *Controversia* 218: 87-125. <https://doi.org/10.54118/controver.vi218.1249>
- González, Ricardo y Carmen Le Foulon. 2020. “The 2019-2020 Chilean protests: A first look at their causes and participants”. *International Journal of Sociology* 50, 3: 227-35. <https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1752499>
- Gutiérrez, Francisco. 2014. *El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)*. Bogotá: Iepri-Universidad Nacional de Colombia.
- Habermas, Jürgen. 1987. *Teoría de la acción comunicativa I*. España: Taurus.
- Hutter, Swen. 2014. “Protest Event Analysis and its Offspring”. En *Methodological Practices in Social Movement Research*, editado por Donatella della Porta, 335-367. Oxford: Oxford University Press.
- Indepaz y Temblores. 2021. “Comunicado conjunto del 8 de mayo de 2021”. <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/05/Comunicado-conjunto-F.pdf>
- International IDEA. 2023. *El estado de la democracia en el mundo y las Américas 2023*. Strömsborg: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
- Instituto de Estudios Interculturales. 2021. “Puntos de bloqueo en la ciudad de Cali. Paro Nacional de 2021”. Pontificia Universidad Javeriana Cali.

- Jurisdicción Especial para la JEP. 2021. *Caso 03. Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado*. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.
- Kozinets, Robert y Rossella Gambetti (eds.). 2021. *Netnography Unlimited: Understanding Technoculture Using Qualitative Social Media Research*. New York: Routledge.
- Mattoni, Alice. 2017. "A Situated Understanding of Digital Technologies in Social Movements. Media Ecology and Media Practice Approaches". *Social Movement Studies* 16, 4: 494-505. <https://doi.org/10.1080/14742837.2017.1311250>
- Melucci, Alberto. 1996. *Challenging Codes. Collective Action in the Information Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Murillo, María Victoria. 2021. "Protestas, descontento y democracia en América Latina". *Nueva Sociedad* 294: 4-13.
- Núñez, Jairo. 2020. "Impacto de la pandemia y los aislamientos obligatorios por Covid-19 sobre la pobreza total y extrema en Colombia". *Informes de Investigación* 19146, Fedesarrollo. <https://ideas.repec.org/p/col/000124/019146.html>
- Offerlé, Michel. 2013. "Barricades". En *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*, editado por David Snow, Donatella Della Porta, Doug McAdam y Bert Klandermans. Hoboken: The Wiley-Blackwell.
- Oxhorn, Philip. 2017. "Civil Society from the Inside Out Community, Organization and the Challenge of Political Influence". En *Re-imagining Community and Civil Society in Latin America and the Caribbean*, editado por Giordana Yovanovich y Roberta Rice, 20-46. New York: Routledge.
- Oxhorn, Philip. 1995. *Organizing Civil Society. The Popular Sectors and the Struggle for Democracy in Chile*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
- Pachón, Damián. 2022. "Simulación y democracia en Colombia o cómo perpetuar el inmovilismo social". En *Pensar en marcha: filosofía y protesta social en Colombia*, editado por Delfin Grueso, Ángela Niño, Eduardo Rueda y Leonardo Tovar, 395-408. Buenos Aires: Clacso. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2v88c98.33>
- Pichardo, Nelson. 1997. "New Social Movements: A Critical Review". *Annual Review of Sociology* 23, 1: 411-30. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.23.1.411>

- Radio Nacional de Colombia. 2021. “Por lo menos 50 heridos tras enfrentamientos entre manifestantes y Esmad en Buga”. *Radio Nacional de Colombia*, 14 de mayo. <https://www.radionacional.co/noticia/regiones/protestas-en-buga-enfrentamientos-esmad>
- Rancière, Jaques. 1996. *El desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Red de Derechos Humanos del Sur Occidente Francisco Isaías Cifuentes. 2021. “Denuncias públicas”. [Blog]. <https://www.facebook.com/RedDhFic/>
- Ríos, Jerónimo. 2021. *Colombia 2016-2021. De la paz territorial a la violencia no resuelta*. Madrid: Catarata.
- Rojas, Fernando. 1985. “Crisis económica y crisis política bajo el gobierno de Betancur. Los movimientos sociales frente a la crisis”. En *Los movimientos sociales ante la crisis*, 225-58. Ciudad de México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales–Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Rosanvallon, Pierre. 2006. *La contre-démocratie: la politique à l’âge de la défiance*. Paris: Seuil.
- Rossi, Federico M. 2022. “Repertoires of Strategies”. En *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*, editado por David A Snow, Donatella Porta, Bert Klandermans y Doug McAdam, 1-7. Hoboken: Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm624>
- Saade, Marta, y Carlos Benavides. 2022. “El paro de paros en Colombia: estallidos plurales y disputas en común”. *Controversia* 218: 15-52. <https://doi.org/10.54118/controver.vi218.1247>
- Snow, David, Donatella Della Porta, Bert Klandermans y Doug McAdam (eds.). 2013. *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. Hoboken: The Wiley-Blackwell.
- Temblores ONG. 2021. “Reportes de la plataforma Grita”. 25 de julio de 2021. <https://www.temblores.org/comunicados>
- Tilly, Charles. 2005. *Popular Contention in Great Britain, 1758-1834*. Boulder: Paradigm.
- Touraine, Alain. 1985. “An Introduction to the Study of Social Movements”. *Social Research* 52, 4: 749-87.
- Urbinati, Nadia. 2008. “Representation and Democracy”. En *Representative Democracy: Principles and Genealogy*, Chapter 1. Chicago: University of Chicago Press.
- Uribe, María Teresa. 2004. “Emancipación social en un contexto de guerra prolongada. El caso de caso de la comunidad de paz de San José de Apartadó”.

- En *Emancipación social y violencia en Colombia*, editado por Mauricio García y Boaventura de Sousa Santos, 75-117. Bogotá: Norma, Banco de la República.
- Valenzuela, Katia. 2022. "Asambleas territoriales. Reinventando lo político en las ciudades chilenas post revuelta". En *El despertar chileno: revuelta y subjetividad política*, editado por Rodrigo Ganter, Raúl Zarzuri, Karla Henríquez y Ximena Goecke, 197-216. Buenos Aires: Clacso. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2v88fjv>
- Voz Populi. 2021. "Colombia retira las estatuas de Colón e Isabel la Católica que los indígenas intentaron derribar". *Voz Populi*, 9 de junio. <https://www.vozpopuli.com/internacional/colombia-monumentos-colon.html#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Cultura%20de,el%20Gobierno%20de%20Iv%C3%A1n%20Duque>

## Legislación

- Alcaldía de Cali. 2021. Decreto 4112.010.20.0304. "Por el cual se adoptan garantías para la construcción de acuerdos, se institucionaliza la mesa de diálogo en el Distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali en el marco del Paro Nacional del 28 de abril de 2021, y se dictan otras disposiciones". <https://www.cali.gov.co/gobierno/loader.php?!Servicio=Tools2&ITipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=52885#:~:text=Institucionalizar%20la%20Mesa%20de%20Dialogo,conduzcan%20de%20manera%20concertada%20a>
- República de Colombia. 2021. Decreto 575. "Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden". Ministerio del Interior, 28 de mayo. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor-normativo/norma.php?i=163846#:~:text=Es%20el%20instrumento%20legal%20que,y%20excepcional%20de%20la%20asistencia>

## Diario de campo

- Diario de campo 1. Registro de eventos ocurridos en el Paro Nacional a través de plataformas virtuales y medios de comunicación nacional e independiente, entre el 28 de abril y 6 de agosto del 2021. La información se enfoca en las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín, y en municipios del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Putumayo, Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, Atlántico y Bolívar. Inédito.